El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

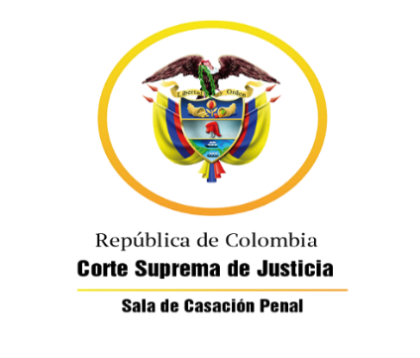
**SENTENCIA / RECURSO DE APELACION / YERROS EN LA VALORACIÓN PROBATORIA / REQUSITOS ARTÍCULO 381 C.P.P / REVOCA**

*… para la Sala no existe duda alguna que las inconsistencias que se le reprochan a los testimonios absueltos por los ocupantes del vehículo colisionado, no tenían la entidad ni la relevancia suficiente como para aniquilar el núcleo central de lo declarado por ellos como lo consideró el Juzgado A quo, máxime cuando eran ellos y no otros, los que se encontraban al interior de ese vehículo, y presenciaron como el tractocamión invadió el carril en sentido contrario, los colisionó con las llantas traseras, lo que ocasionó que no pusieren maniobrar la situación, resultando afectada así la integridad del señor CORRECHA HENAO.*

*Todo lo antes expuesto, le permite a la Sala concluir que el Juzgado de primer nivel sí incurrió en los yerros de valoración probatoria denunciados por el recurrente, por cuanto las pruebas habidas en el proceso lograban demostrar, de manera fehaciente, la tesis propuesta por el apoderado de las víctimas sobre el comportamiento imprudente, y por ende culposo, reprochado al procesado…*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

****

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA**

**SALA DE DECISIÓN PENAL No. 4**

**M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA**

**SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA**

Pereira, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2.025)

Aprobado por acta # 361

Hora: 2:10 p.m.

Procesado: DARM

Delito: Lesiones Personales Culposas

Rad. # 66170 60 00 066 2016 02198 01

Procedencia: Juzgado 2º Penal Municipal, con Funciones Mixtas, de Dosquebradas.

Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las víctimas en contra de sentencia absolutoria.

Temas: Yerros en la valoración del acervo probatorio - Requisitos para la procedencia de la imputación objetiva de un resultado.

Decisión: Revoca el fallo opugnado y declara la responsabilidad criminal del procesado.

**ASUNTO A DECIDIR:**

Procede la Sala de Decisión Penal # 4 del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado de las víctimas, en contra de la sentencia absolutoria proferida el 21 de marzo de 2.023 por parte del Juzgado 2º Penal Municipal con Funciones mixtas de Dosquebradas, en el devenir del proceso que se adelantó en contra del ciudadano DARM, quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas.

**ANTECEDENTES:**

Los hechos que concitan la atención de la Sala tuvieron ocurrencia en el municipio de Dosquebradas aproximadamente a eso de las 23:40 horas del día 21 de octubre de 2.016 en la Calle 8, frente al No 9-45, sector Jota Gallo, y están relacionados con un accidente de tránsito en virtud del cual el rodante — tipo tractocamión — de placas SNO647, conducido por el señor DARM, colisionó con el automóvil de placas KDU587, piloteado por FELIPE GARCIA GARCIA.

Según se desprende del contenido del libelo acusatorio, se tiene que el tractocamión transitaba por la calle 8, sentido Occidente - Oriente, al tomar la curva frente al No. 9-45, se cerró demasiado e invadió el carril contrario, por el cual transitaba el vehículo que se dirigía en sentido Oriente Occidente, el que no alcanzó a maniobrar para evitar la colisión, golpeándose contra las llantas traseras del tractocamión, rebotando hasta el andén, y resultando lesionados tanto el conductor como sus acompañantes, entre ellos, el señor CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO.

Como consecuencia de lo acontecido, al señor CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO le dictaminaron, por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), una incapacidad médico-legal definitiva de ciento cincuenta (150) días con secuelas de perturbación funcional de miembro inferior izquierdo de carácter permanente, por la limitación de los movimientos de la articulación coxofemoral izquierda.

**LA ACTUACIÓN PROCESAL:**

1. Al presente asunto se le dio trámite a la luz de lo establecido en la Ley # 1.826 de 2017 conocido como *“Procedimiento Especial Abreviado”*, y por ende la Fiscalía General de la Nación (F.G.N.) el día 21 de septiembre de 2.021 le corrió traslado al señor DARM y a su Defensor del escrito de acusación, mediante el cual se le endilgaron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas, tipificado en los artículos 111, 112 inciso 3º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º, 117 y 120 del C.P. Dichos cargos no fueron aceptados por el ahora procesado.
2. El conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 2º Penal Municipal, con funciones mixtas, de Dosquebradas, ante el cual se llevaron a cabo las siguientes audiencias: a) El 14 de febrero de 2.022, se celebró la audiencia concentrada; b) La audiencia de juicio oral tuvo lugar el 20 de febrero de 2.023; c) El 27 de febrero de esa misma anualidad, se anunció el sentido del fallo, el cual resultó ser absolutorio. Posteriormente, el 21 de marzo de 2.023, se les dio traslado a las partes de la sentencia absolutoria, en contra de la cual se alzó de manera oportuna el apoderado de las víctimas.

**LA SENTENCIA OPUGNADA:**

Se trata de la sentencia proferida el 21 de marzo de 2.023[[1]](#footnote-1) por parte del Juzgado 2º Penal Municipal con funciones mixtas de Dosquebradas, mediante la cual se absolvió al procesado DARM de los cargos por los que fue llamado a juicio y que estaban relacionados con incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas.

Los argumentos expuestos por el Juzgado de primer nivel para cimentar su decisión, se centraron en aducir que luego de haberse surtido la práctica de las pruebas y los respectivos alegatos de conclusión, se concluyó que dentro del presente asunto no se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, mismos que son necesarios para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del acusado.

Para poder llegar a la anterior conclusión, el Juzgado de primer nivel expuso lo siguiente:

* Existe contradicción entre los testimonios rendidos por los señores CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO y FELIPE GARCIA GARCIA, en cuanto a que el primero de ellos, adujo que su posición en el vehículo era en la parte trasera en medio del conductor y del copiloto, lo que a su consideración le permitía tener plena visibilidad de la vía, mientras que el segundo (el conductor), al momento de ser indagado sobre la posición de los ocupantes del vehículo, expuso que el señor CORRECHA HENAO iba en la parte trasera del vehículo, específicamente detrás del copiloto, y a su lado un perro cachorro.

Dicha contradicción resta credibilidad al testimonio del señor CORRECHA HENAO, en lo que respecta a la visibilidad que adujo tener al momento del accidente, ya que si su posición era detrás del copiloto, se puede concluir que su visibilidad era reducida, aunado al hecho de que venía manipulando su celular, lo que reduce las posibilidades de que pueda dar información fidedigna de cómo realmente ocurrió el accidente.

* Si bien es cierto se escucharon en juicio los testimonios de los agentes de tránsito ERICA JOVANA HENAO PRADO y BENHUR ANDRÉS SALDAÑA GÓMEZ, quienes concluyeron que en el presente evento hubo una invasión de carril por parte del vehículo tractocamión, también lo es que el agente SALDAÑA GÓMEZ, agregó que en virtud de las condiciones de la vía y del tamaño del tractocamión, es insalvable que en esa curva un vehículo de dichas características no invada el carril, aduciendo en que virtud de dicha situación los dos vehículos fueron codificados: el vehículo tractocamión por invadir el carril contrario y el vehículo Twingo por impericia en la conducción.
* Pese a que ambos vehículos fueron codificados, el tractocamión, inexorablemente por sus condiciones de infraestructura, sumado a las condiciones de la vía para dar la curva, debía invadir el carril contrario, siendo ello una maniobra involuntaria, por lo que no pude aducirse que en cabeza de este conductor haya la comisión de un delito imprudente como lo es el delito de lesiones personales culposas, ello se explica en el hecho de que si bien la carrocería del tractocamión invadió el carril contrario, ello es una consecuencia por sus condiciones físicas y las condiciones de la vía, más no en el acto imprudente de querer violar reglamentos, o poderse aducir falta al deber objetivo de cuidado.
* Si bien es cierto, en los alegatos de conclusión, la Fiscalía, el representante de víctimas y el señor defensor del acusado hablaron de velocidad, a juicio no se trajo concepto especializado que diera cuenta de manera certera que el actuar de los dos vehículos fuera imprudente en dicho sentido, lo único que se registró es una huella de frenado que no dice mucho de la responsabilidad en cabeza del señor DARM, pues de lo que ello da cuenta fue que él si observó a distancia el vehículo Twingo y frenó, mientras que de este último vehículo no existe huella de frenado, lo que puede significar dos cosas (i) que en efecto su vehículo estaba detenido al momento del impacto o (ii) que el rodante iba en marcha, pensó que alcanzaba a esquivar la parte trasera del tractocamión y finalmente impacta con él; no obstante, ninguna de esas hipótesis enunciadas fue probada en juicio.
* Existen muchas dudas en lo que respecta a la responsabilidad penal endilgada al señor DARM, por cuanto la invasión del carril no es determinante por si sola para demostrar la imprudencia en cabeza del aquí acusado, pues en el presente asunto ocurrió un escenario particular, esto en cuanto al tamaño del vehículo tractocamión y la dimensión de la vía que es angosta según el concepto emitido por el agente de tránsito, lo que conlleva a que cualquier vehículo de dichas dimensiones sobrepase de manera involuntaria al otro carril con la parte trasera; diferente situación acontecería si el impacto entre los vehículos se hubiese dado con la cabina del tractocamión y que en dicha colisión la parte delantera de este invadiera el otro carril, ello sí hubiese permitido concluir una imprudencia del conductor de dicho vehículo.
* En el presente asunto existió una autopuesta en peligro por parte del señor CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO, toda vez que quedó demostrado en juicio que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, situación que lo puso en mayor riesgo respecto de las consecuencias de la colisión.
* Todo lo anterior permite concluir que no existe conocimiento más allá de toda duda razonable respecto de la responsabilidad penal endilgada al ciudadano DARM, ya que la causalidad por sí sola, no basta para la imputación jurídica del resultado, y el presunto hecho generador de riesgo no se da por imprudencia del actor, sino por una consecuencia ajena a su voluntad.

**LA ALZADA:**

La inconformidad expresada por el apoderado de las víctimas, se encuentra circunscrita en refutar lo consignado en el fallo opugnado como sustento de la absolución proferida en favor del procesado DARM bajo dos argumentos específicos (i) El A quo no debió cercenar los testimonios de los ocupantes del vehículo al existir algunas contradicciones en sus declaraciones, ya que las mismas no eran determinantes para restar credibilidad y concluir que los hechos ocurrieron de una forma diferente a lo que se dijo por los deponentes (ii) Erró el Juzgado de primer grado al considerar que la víctima CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO fue quien se autoexpuso a una fuente de riesgo, toda vez que este no conocía el riesgo en toda su extensión, y tampoco lo provocó conscientemente.

Respecto del primer punto, señaló el apelante que aunque los testigos no concuerdan en algunos puntos del testimonio, el *A quo* no debió cercenar los testimonios por completo ya que muchas veces los testigos, por la memoria que tienen de un hecho, pueden variar detalles debido al tiempo de ocurrencia de los mismos y la velocidad en que pueden suceder, que para este asunto resultan completamente irrelevantes, ya que el punto central que se necesitaba corroborar por parte del despacho no se incurrió en contradicción alguna, por el contrario, los dos testigos fueron fidedignos frente a como se dirigían, cómo fue la colisión en la curva, y en la invasión del carril contrario por parte del tractocamión conducido por el acusado.

Acorde con lo anterior, concluyó el apelante que el Juzgado de primera instancia incurrió en un yerro en cuanto a la valoración probatoria, restando credibilidad en aspectos sustanciales del testimonio argumentando contradicciones, desconociendo flagrantemente los principios de la lógica y las máximas de la experiencia que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha referido en diferentes providencias.

Ahora, en cuanto al segundo argumento, consideró el quejoso que los testimonios rendidos por los agentes de tránsito permitieron avizorar la flagrante violación del deber objetivo de cuidado del acusado, ya que ambos fueron enfáticos en afirmar que el tractocamión invadió el carril contrario, y si bien, por parte del agente BENHUR ANDRES SALDAÑA GOMEZ se adujo que teniendo en cuenta las condiciones de la vía, resultaba completamente necesario que el tractocamión invadiera el carril contrario para proseguir su marcha, también lo es que no se puede desconocer que si el conductor del tractocamión conocía del tamaño del vehículo, de lo difícil que es ingresar en una curva sin invadir el carril contrario, debió tomar las precauciones necesarias para ello y no hacerlo confiado de que no se dirigía ningún otro vehículo por el carril contrario, pues es claro que cuando un vehículo de carga pesada va realizar una maniobra dentro de una vía que, por sus condiciones, no le permite mantenerse dentro de las proporciones que le corresponden, debe tomar precauciones para evitar daños a terceros y/o materiales, lo que denota la palmaria la impericia con la que cuenta el acusado para la conducción de vehículos, de tal suerte que su obrar resultó ser imprudente y además violatorio de los deberes objetivos de cuidado y reglamentos que debía prever para evitar colisiones con otros vehículos.

En tal sentido, el apelante arguyó que en el proceso se demostró que el acusado obró con un desconocimiento a los deberes de cuidado que para la conducción de vehículos automotores se imponen, pues no tomó las precauciones debidas si necesitaba invadir el carril contrario, así como tampoco se demostró que haya sido asistido por otra persona que, por la necesidad del camión para tomar la curva e invadir el carril, hubiese sido necesario que detuviera el tráfico automotor para tomar la curva y evitar el siniestro vial que lesionó gravemente al ciudadano CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO.

De igual manera, el recurrente expuso que el *A quo* intentó fundamentar una autopuesta en peligro por parte de la víctima, quien, a pesar de ser pasajero en la parte de atrás del vehículo, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Sin embargo, adujo que para el caso concreto sucede algo particular, y es que la víctima no conocía el riesgo en toda su extensión y tampoco lo provocó conscientemente, ya que como quedó debidamente probado, el acusado, mientras conducía el tractocamión, invadió el carril contrario provocando el accidente de tránsito y lesionando con secuelas permanentes a su representado.

Acorde con lo anterior, el recurrente deprecó por la revocatoria del fallo opugnado, para que en su lugar se declare la responsabilidad criminal del procesado DARM acorde con los cargos por los cuales fue llamado a juicio.

**LAS RÉPLICAS:**

**- EL DELEGADO DEL ÓRGANO PERSECUTOR**, si bien intervino como sujeto procesal no recurrente, lo cierto es que del contenido del memorial allegado, se decanta que los argumentos van dirigidos a atacar la decisión de primera instancia, enfocándose en demostrar dos hipótesis: (i) la ocurrencia del delito y (ii) la responsabilidad penal del acusado.

Considera el no apelante, que los testimonios vertidos en audiencia de juicio oral, en donde se respetaron los principios de inmediación y contradicción, sirvieron de base al Juzgado de Conocimiento para determinar la existencia del hecho punible, amén de los elementos materiales probatorios que se introdujeron con estos testigos, y que se allegaron como plena prueba al proceso, sin ser objetados en ningún momento por la defensa, por lo que no existe duda alguna que los mismos constituyen una conducta punible y que está tipificada en el código penal como lesiones personales culposas.

Por otra parte, resaltó el delegado de la Fiscalía que con los testimonios de los agentes de tránsito quedó probado que el actuar del conductor del tractocamión fue imprudente, cuando invadió carril en sentido contrario; demostrándose la impericia, la falta al deber objetivo de cuidado y la violación de reglamentos, toda vez que se trataba de un tractocamión, vehículo que es voluminoso, con mucha fuerza en su motor, automotores que deben ser conducidos por personas con mucha experiencia y práctica en su conducción, ya que no es cualquier vehículo.

En el presente asunto el señor DARM tenía que observar en forma constante la vía por donde iba a transitar y no salirse bajo ninguna circunstancia del carril que él tiene asignado y siempre estando pendiente de su parte trasera cuando se trata de una curva, mediacurva, o vaya a girar, esto fue lo que no observó en su pericia al conducir y por imprudencia hubo la colisión con la parte trasera del tractocamión.

Bajo esas circunstancias, consideró que en el presente caso sí se superó el principio constitucional de la presunción de inocencia, ya que el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación, le demostró al señor DARM su participación en forma culposa en la comisión del delito, porque logró allegar pruebas suficientes que fueron sometidas en el juicio oral a la inmediación y la contradicción, y que permiten sustentar una sentencia condenatoria considerando que se demostró la responsabilidad del acusado en la comisión del delito culposo.

Por todo lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia absolutoria de primer grado, y en su lugar, se declare la responsabilidad penal del acusado por los hechos por los cuales se le hizo llamamiento a juicio.

**- EL DEFENSOR**, como sujeto procesal no recurrente, solicitó confirmar la sentencia absolutoria que fue proferida en favor de su representado al considerar que la F.G.N no logró demostrar más allá de toda duda razonable que el acusado haya violado el deber objetivo de cuidado, y que de esta manera se emita una sentencia condenatoria en su contra, por el contrario, adujo que fue la impericia del conductor del Renault Twingo, conducido por el Señor FELIPE GARCIA, quien ocasionó el accidente, situación que se corrobora a través de la declaración el juicio del agente de tránsito BENHUR ANDRES SALDAÑA, quien señaló que debido a las condiciones de la vía y del peso rodante, el tripulante de la tractomula debía invadir el carril contrario, observándose que la invasión fue mínima de la llanta trasera izquierda, y por ende era el tripulante del Renault Twingo quien debía abstenerse de continuar la marcha y reducir la velocidad, al percatarse de la presencia del pesado automotor.

**PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

**- Competencia:**

La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, acorde con lo consignado en el numeral 1º del artículo 34 C.P. es la competente para asumir el conocimiento del presente asunto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran a este Distrito Judicial.

Igualmente, la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la presente actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de fondo de la presente alzada.

**- Problema Jurídico:**

Del contenido de los argumentos esgrimidos por el recurrente en la alzada, a juicio de la Sala se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Incurrió el Juzgado de primer nivel en yerros en la apreciación del acervo probatorio, que le impidieron darse cuenta que las pruebas habidas en el proceso satisfacían los requisitos exigidos por parte del artículo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del procesado DARM acorde con los cargos por los cuales fue llamado a juicio?

**- Solución:**

Teniendo en cuenta que los reproches formulados por el apelante en contra de lo resuelto y decidido por el Juzgado de primer nivel en el fallo confutado, giran en torno a cuestionar la apreciación y la valoración que el Juzgado *A quo* efectuó del acervo probatorio, a fin de determinar si le asiste o no la razón al apelante a los cuestionamientos efectuados en contra de la sentencia opugnada, se torna necesario por parte de la Colegiatura proceder a llevar a cabo un análisis de las pruebas debatidas en el juicio.

Como punto de partida, la Sala tendrá como hechos ciertos e indiscutibles, por estar plenamente acreditados en el proceso y porque los mismos han sido admitidos como válidos por las partes, los siguientes:

* La ocurrencia del accidente de tránsito que tuvo lugar a eso de las 23:40 horas del día 21 de octubre de 2.016 en la calle 8, frente al No 9-45, sector Jota Gallo, Comuna 1 del municipio de Dosquebradas, en virtud del cual el rodante tipo tractocamión de placas SNO647 colisionó con su parte trasera al vehículo tipo automóvil de placas KDU587.
* Está demostrado que la vía en la que ocurrió el insuceso, se trataba de una curva, ubicada en una vía urbana, construida en concreto, ubicada en sector industrial, de una calzada, con dos carriles de doble sentido de circulación, en buen estado. La cual, entre sus señales de tránsito tenía demarcado el sentido vial.
* El vehículo tipo tractocamión de placas SNO647, conducido por DARM, se desplazaba en sentido Occidente – Oriente sector “Jota gallo” del municipio de Dosquebradas, mientras que el vehículo tipo automóvil de placas KDU587, conducido por FELIPE GARCIA GARCIA se desplazaba en dirección Oriente – Occidente del mismo sector de esa municipalidad. En este último, viajaba como copolito el señor NORBERTO VALENCIA USMA, y como pasajero trasero el ciudadano CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO.
* No existe duda alguna sobre la causa del accidente de tránsito, la cual se debió a que el vehículo tipo tractocamión de placas SNO647, conducido por DARM, con su parte trasera, al momento de tomar la curva específicamente situada en la calle 8, frente al No 9-45, sector Jota Gallo del municipio de Dosquebradas, invadió el carril contrario por el que se movilizaba el automóvil de placas KDU587, conducido por FELIPE GARCIA GARCIA en sentido Oriente – Occidente, con el cual colisionó.
* Como consecuencia de lo acontecido, el pasajero que se encontraba en la parte de atrás del vehículo de placas KDU587 -CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO- sufrió lesiones en su integridad, razón por la que el INMLCF le dictaminó una incapacidad médico legal definitiva de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS con secuelas de perturbación funcional de miembro inferior izquierdo de carácter permanente; por la limitación de los movimientos de la articulación coxofemoral izquierda.

Estando claro cuáles son los hechos que se encuentran plenamente demostrados en el proceso, el tópico que restaría ahora por esclarecer estaría relacionado con determinar si en el proceso existían o no pruebas que demostraban la conducta culposa por parte del procesado cuando procedió a invadir el carril contrario de la vía por la cual transitaba; de lo cual, como se sabe, existe una controversia, porque para el Juzgado de primer nivel dicho comportamiento no se encontraba plenamente demostrado con las pruebas habidas en el proceso, ya que por tratarse de un vehículo de grandes proporciones, la invasión del carril correspondía a un acto involuntario en el que incurrió el procesado para poder sortear la curva; lo que a su vez ha sido refutado por el apelante en la alzada, quien adujo que el Juzgado *A quo* no apreció en debida forma las pruebas debatidas en el juicio, de las cuales se avizoraba el proceder impudente reprochable del acusado.

Para poder determinar si le asiste o no la razón a la tesis de la inconformidad propuesta por el recurrente en la alzada, le correspondería ahora a la Sala analizar si en efecto, el resultado de lo acontecido, o sea las lesiones ocasionadas al ciudadano CORRECHA HENAO, podía o no serle jurídicamente imputado al procesado DARM, como consecuencia de haber incrementado los límites tolerados del riesgo jurídicamente permitido durante el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo son aquellas relacionadas con la conducción de vehículos automotores.

Para absolver el anterior interrogante, como punto de partida debemos tener en cuenta que uno de los elementos que integran la tipicidad en el delito culposo es el de la imputación jurídica del resultado, también conocido como ***“teoría de la imputación objetiva”***, el cual pregona que el nexo de causalidad que debe existir entre la acción y el resultado no solo debe ser de contenido estrictamente naturalístico sino también jurídico, lo que quiere decir que para que una conducta pueda ser considerada como delictiva no solo basta con que se acredite la relación ontológica de causalidad habida entre la acción y el resultado, sino que también ese resultado debe ser producto de una valoración de tipo jurídica. Siendo ello la razón por la cual el artículo 9º C.P. pregona que *“la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado…”*.

Estando esclarecido que el juicio de imputación objetiva, por estar integrado con la relación de causalidad, que debe de existir entre acción y resultado, hace parte de los elementos que estructuran el delito, porque es obvio que no puede haber delito en aquellos eventos en los que no se presente ningún tipo de relación de causalidad entre el accionar del sujeto agente y el resultado dañino, es necesario acotar que para poder imputar jurídicamente un resultado, el operador jurídico, debe inicialmente precisar los elementos que integran a la imputación objetiva, los que acorde con la doctrina especializada serían los siguientes:

*“Relación de causalidad en los delitos comisivos; creación de un riesgo jurídicamente desaprobado; y relación de riesgos, es decir que el riesgo permitido creado por el sujeto es el mismo que se concreta en el resultado…”[[2]](#footnote-2)*

Por lo que, a modo de síntesis, *«en sede de imputación objetiva corresponde examinar si se creó o elevó un riesgo jurídicamente desaprobado y si éste se realizó en el resultado…»[[3]](#footnote-3)*

En lo que tiene que ver con el primero de dichos requisitos, solo basta con enunciar que la relación de causalidad corresponda al nexo naturalístico que debe existir entre una acción y un resultado. A su vez, en lo que respecta con el requisito del riesgo jurídicamente desaprobado, este está relacionado con aquellos tipos de comportamientos que por su peligrosidad o nocividad para producir un resultado nocivo en la comunidad han sido desaprobados o desautorizados por el ordenamiento jurídico.

Es de anotar que para poder determinar cuándo se está o no en presencia de un riesgo jurídicamente desaprobado *“entran en consideración tres instituciones básicas: 1. El riesgo permitido y el principio de confianza. 2. La prohibición de regreso, y 3. Las acciones a propio riesgo...”[[4]](#footnote-4)*

Sobre el *principio del riesgo permitido*, este se presenta respecto del ejercicio de una serie de comportamientos y de actividades, los que a pesar de ser peligrosos por generar una fuente de riesgos o de amenazas para la comunidad, V.gr. la energía nuclear, el uso de explosivos, el tránsito automotor, el ejercicio de la profesión médica, etc… por razones de utilidad social o de necesidad su ejercicio ha sido permitidos o tolerados, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos o de protocolos.

Mientras que con el *principio de confianza*, el que tiene ocurrencia en el ámbito de las interrelaciones sociales, v.gr. el trabajo en equipo, el tránsito automotor y la administración pública, se pregona que una persona no puede responder por los hechos o las acciones de otras siempre y cuando su comportamiento se amolde con las exigencias de la norma, lo que le genera a su favor la expectativa razonable de esperar que los demás miembros de la comunidad también deban actuar conforme a la misma.

A su vez *las acciones a propio riesgo*, también conocidas como autopuesta en peligro, se presentan en aquellos *«casos en que un tercero favorece o crea una situación en la cual el titular del bien jurídico, realiza una acción peligrosa para sus propios bienes. El riesgo solo se concreta por una conducta de intermediación de la propia víctima…»[[5]](#footnote-5)*

Por otra parte, según el *principio de la prohibición de regreso*, este tiene ocurrencia cuando *«alguien colabora dolosa o imprudentemente a la realización del tipo, pero no existe responsabilidad para este tercero porque la contribución que ha prestado se encuentra dentro del riesgo permitido…»[[6]](#footnote-6)*

Finalmente, en lo que tiene que ver con el *requisito de la relación de riesgos*, este consiste en que debe existir la probabilidad consistente en que el resultado, o sea el daño ocasionado al bien jurídicamente protegido pudo haber sido producto o una consecuencia del incremento o de la elevación del riesgo jurídicamente permitido.

Al tomar lo anterior como marco conceptual a fin de determinar si en efecto el procesado incurrió o no en un comportamiento imprudente que repercutió en un incremento del riesgo jurídicamente permitido, es deber de la Sala proceder a efectuar un análisis de las pruebas debatidas en el proceso

Acorde con lo anterior, tenemos lo siguiente:

* De un análisis en conjunto y sistemático de los declarado por los ofendidos CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO y FELIPE GARCÍA GARCÍA, se tiene que instantes antes de que el rodante en el que se movilizaban, fueran embestido por las llantas traseras del vehículo tractocamión conducido por DARM, **el que, no sobra decir, invadió el carril por el que circulaban**, ellos transitaban por una vía en condiciones normales, y que estaba debidamente señalizado el sentido vial tal y como se indicó por parte de los agentes de tránsito que rindieron su declaración en juicio, inclusive no se puede desconocer que el vehículo tipo automóvil aproximadamente diez minutos antes del suceso, fue detenido por unos policiales para una revisión de rutina y prevención, en donde al todo tornarse bien, continuaron su rumbo sin dificultad alguna.
* Según el testimonio absuelto por CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO -pasajero trasero- cuyos dichos fueron ignorados por el Juzgado de primer nivel al momento de apreciar el acervo probatorio por considerar que hubo serias contradicciones con el testimonio rendido por parte de FELIPE GARCÍA GARCÍA -conductor- se extrae que para el día de los hechos ellos se dirigían sentido Oriente - Occidente a una velocidad normal, y cuando iban a tomar la curva, específicamente situada en la calle 8, frente al No 9-45, sector Jota Gallo del municipio de Dosquebradas, se vieron embestidos por la parte trasera de un tractocamión, lo que ocasionó que el vehículo rebotara hasta el andén, resultando lesionado el señor CORRECHA HENAO, quien como ya se indicó venía en la parte trasera, sin que el conductor del pequeño vehículo hubiese tenido la oportunidad de maniobrar esa invasión de carril y así salir bien librados del suceso que hoy ocupa la atención esta Sala de Decisión Penal.
* Del contenido de los testimonios absueltos por los agentes de tránsito ERICA JOVANA HENAO PRADO y BENHUR ANDRÉS SALDAÑA GÓMEZ, deberá decirse que el Juzgado A quo al momento de valorar las pruebas solo tuvo en cuenta los dichos de SALDAÑA GÓMEZ, quien señaló que la razón de que el conductor del tractocamión invadiera el carril del sentido contrario, era porque se trataba de un vehículo de grandes dimensiones, lo que resultaba apenas normal que se saliera de su carril para poder sortear la curva en la que sucedió la colisión, sin embargo, el Juzgado *A quo* desechó la versión en la que ambos declarantes fueron consistentes, y era que el tractocamión invadió el carril contrario, violando así el reglamento vial que le asistía cumplir, máxime cuando se trataba de un vehículo de carga pesada, que como bien lo deja entrever la lógica, requiere de más cuidado y de ciertas prevenciones en las diferentes vías por las que transita.

Ahora, al valorar y apreciar de manera conjunta las anteriores pruebas, se puede válidamente concluir lo siguiente:

* No cabe duda que la causa del accidente **fue una consecuencia de la exclusiva imprudencia del procesado**, por cuanto de las pruebas debatidas en el proceso, se tiene que al momento en el que tractocamión tomara la curva, con su parte trasera invadió el carril del sentido contrario de la vía por la que transitaba, situación que ocasionó que colisionara al vehículo conducido por FELIPE GARCÍA GARCÍA, en el que iba como pasajero el señor CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO, quien además resultó lesionado de forma considerable, de acuerdo a la incapacidad médico legal que le dictaminó el Instituto Nacional de Medicina Legal.
* La Fiscalía con las pruebas habidas en el proceso pudo demostrar de manera indubitable que la causa que generó el accidente de tránsito se debió a la **imprudencia del procesado**, quien, en sentir de la tesis propuesta por el apoderado de las víctimas y despachada desfavorablemente por el Juzgado de primer nivel, desconoció que el señor DARM violó el reglamento y faltó al deber objetivo de cuidado que le asistía al momento de conducir este vehículo de carga pesada.
* No cabe duda de que el procesado **incurrió en un comportamiento imprudente el cual tuvo incidencia en el resultado de lo acontecido**, porque de no haber invadido el carril contrario como lo hizo, seguramente que el conductor del vehículo en el que se desplazaba el señor CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO, hubiese podido continuar su rumbo normal sin que se afectara su integridad física.

Ahora bien, estando esclarecida la imprudencia del conductor del tractocamión y la invasión del carril en sentido contrario por la vía en la que transitaba, el tópico que nos quedaría por esclarecer es que si por tratarse de un vehículo de grandes dimensiones, era justificable la invasión del carril en sentido contrario tal y como lo considero el Juzgado *A quo*; para ello deberá decirse, que no es de recibo para la Sala dicha apreciación, ya que ese acto imprudente no se trata de una acción involuntaria, por el contrario, el conductor a sabiendas de las condiciones del vehículo que maniobraba, requería cierto grado de pericia a la hora de conducirlo, estando en la obligación de prever algún tipo de situación como la presentada, máxime cuando sabía que estaba transitando por una vía de doble sentido, por lo que al momento de tomar la curva le era exigible que asumiera un cuidado y una prevención mayor a la que se requiere por otro tipo de vías.

Frente a la anterior controversia, la Sala se inclinará por la tesis de discrepancia planteada por el apoderado de las víctimas en su recurso de alzada, por cuanto la única manera para que el rodante tipo tractocamión sorteara la curva que se encontraba por la vía por la cual transitaba, **no era invadir el carril de sentido contrario**, pues bien pudo acudir a otras medidas preventivas que evitaran la ocurrencia del hecho respecto del cual hoy ocupa la atención esta Colegiatura, tales como la detener el rodante en el evento que se percatara de la presencia de otro vehículo que transitara por el carril contrario.

Así las cosas, no existe duda alguna que en el presente asunto el conductor del tractocamión creo el riesgo jurídicamente permitido al momento de invadir el carril contrario sin prevención alguna, lo que permite concluir que la fuente del incremento del resigo se debió a su **imprudencia** y la **violación objetiva al deber de cuidado** que le asistía al momento de maniobrar este tipo de vehículos, que como ya se dijo a lo largo de este proveído, requería de cuidado y prevención especial, precisamente para evitar accidentes como el que aquí se presentó, dado que era previsible que como consecuencia de las dimensiones del rodante, al ingresar en una curva pudiera invadir el carril contrario, como en efecto sucedió en el caso en estudio.

Por otro lado, en lo que resta con el otro de los argumentos esgrimidos por parte del Juzgado *A quo* para absolver al procesado, según los cuales en el presente asunto existió una autopuesta en peligro por parte del señor CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO, toda vez que quedó demostrado en juicio que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, situación que lo puso en mayor riesgo respecto de las consecuencias de la colisión. Pero en el evento que el Juzgado de primer nivel hubiese aplicado el instituto de la relación de riesgos, de seguro que habría caído en cuenta que en el evento de que el Sr. CORRECHA HENAO, hubiese llevado el cinturón de seguridad, de seguro que el resultado habría sido el mismo, pero tal vez la gravedad de las lesiones podría haber sido de menor entidad.

Tal situación, le lleva a la Sala a concluir que en el presente asunto existe una concurrencia de comportamientos imprudentes: el del procesado, quien sin prever lo que en realidad podría suceder, invadió el carril contrario; y el del ofendido, quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el rodante en el que se movilizada.

Pero, de haberse aplicado el postulado de la relación de riesgos, el cual es uno de los elementos que integran la teoría de la imputación objetiva[[7]](#footnote-7), en el que se torna necesario precisar que *«el riesgo permitido creado por el sujeto es el mismo que se concreta en el resultado...»*[[8]](#footnote-8); válidamente se habría llegado a la conclusión que el comportamiento imprudente que se le reprocha al procesado fue el determinante en la ocurrencia del resultado antijuridico que se le reprocha.

Pese a lo anterior, la Colegiatura no puede desconocer que en el presente asunto nos encontramos en presencia del escenario que se conoce como la *concurrencia de culpas*, lo que en el escenario de la responsabilidad patrimonial generada como consecuencia de la comisión del delito desencadenaría en el fenómeno de la compensación de culpas que se encuentra regulado en el artículo 2.357 del Código Civil, el cual pregona por una reducción de la indemnización de los perjuicios en aquellos eventos en los cuales el agraviado ha contribuido con su comportamiento imprudente en el resultado dañoso, por lo que es obvio que por estar en presencia de un tema eminentemente patrimonial suscitado como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad criminal, sería válido colegir que el incidente de reparación integral vendría siendo el escenario idóneo en el cual se deben ventilar esos tópicos.

Finalmente, frente a las contradicciones en las que incurrieron varios de los testigos de cargo, las que le sirvieron de fundamento al Juzgado *A quo* para proferir el fallo absolutorio, la Sala dirá que el Juzgado de primer nivel incurrió un lamentable yerro en la valoración del acervo probatorio, ya que por el simple y mero hecho **que apartes de la versión de un testigo no se encuentre en consonancia con varias de las pruebas allegadas al proceso, eso no es razón suficiente para invalidar la credibilidad de sus dichos**, porque en esos eventos el operador judicial debe de hacer una especie de disección del testimonio, para de esa forma purgar todo aquello que no amerita credibilidad, y dejar lo que sí lo merece.

Sobre lo antes expuesto, es menester traer a colación lo que la Corte ha dicho en los siguientes términos:

“El recurrente desconoce tan consolidada línea de pensamiento al sugerir que la narración testimonial constituye una unidad indivisible que debe acogerse o rechazarse íntegramente, como si su contenido descriptivo conformara una premisa unitaria cuya compatibilidad o incompatibilidad con los hechos probados tuviese que ser valorada en bloque. **En realidad, aquélla – la narración testimonial - comprende varias proposiciones de orden fáctico, de las cuales el fallador puede, como sucedió en este caso, tomar unas y descartar otras con apego a la sana crítica y desde una valoración integral del acervo probatorio**…”[[9]](#footnote-9)

En el caso *subexamine*,si bienhubo una contradicción entre los testimonios de FELIPE GARCÍA GARCÍA y CRISTIAN DAVID CORRECHA HENAO al momento de determinar cuál era la posición en la que iba el pasajero de atrás, es decir si iba a un costado derecho, izquierdo o en el medio, la Sala luego de analizar lo testificado por ellos, es de la opinión consistente en que son mínimas las inconsistencias y contradicciones que se les reprochan, y por ende como consecuencia de esa futilidad, se tiene que *«las contradicciones sobre aspectos accesorios no destruyen la credibilidad del testimonio, aunque sí la aminoran, sin que ello traduzca ruptura de la verosimilitud…»[[10]](#footnote-10)*.

Por lo tanto, para la Sala no existe duda alguna que las inconsistencias que se le reprochan a los testimonios absueltos por los ocupantes del vehículo colisionado, no tenían la entidad ni la relevancia suficiente como para aniquilar el núcleo central de lo declarado por ellos como lo consideró el Juzgado *A quo*, **máxime cuando eran ellos y no otros, los que se encontraban al interior de ese vehículo, y presenciaron como el tractocamión invadió el carril en sentido contrario,** los colisionó con las llantas traseras, lo que ocasionó que no pusieren maniobrar la situación, resultando afectada así la integridad del señor CORRECHA HENAO.

Todo lo antes expuesto, le permite a la Sala concluir que el Juzgado de primer nivel sí incurrió en los yerros de valoración probatoria denunciados por el recurrente, por cuanto las pruebas habidas en el proceso lograban demostrar, de manera fehaciente, la tesis propuesta por el apoderado de las víctimas sobre el comportamiento imprudente, y por ende culposo, reprochado al procesado DARM cuando conducía el vehículo tipo tractocamión de placas SNO647, indicando la realidad probatoria que el resultado de lo acontecido se le podía imputar jurídicamente al procesado quien con su proceder incrementó los límites del riesgo jurídicamente permitido.

Siendo así las cosas, la Sala procederá a revocar la sentencia confutada, para en su lugar declarar la responsabilidad criminal del procesado DARM por incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas, por cuanto de un análisis en conjunto de los medios de conocimiento habidos en el proceso, se tiene que los mismos cumplen a satisfacción con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para que en contra del procesado de marras válidamente se pueda proferir una sentencia condenatoria por incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas.

Como consecuencia de la declaratoria en sede de 2ª instancia del compromiso penal endilgado al procesado DARM por incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas, le corresponde ahora a la Sala llevar a cabo las correspondientes operaciones de dosimetría punitiva que se han de tener en cuenta en el escenario de la dosificación la pena a imponer.

En tal sentido tenemos que el delito de lesiones personales conforme a la calificación jurídica que se insertó en el acápite correspondiente, se encuentra tipificado en los artículos 112, inciso 3°, 114 inciso 2°, 120 del C.P. los cuales son sancionados con las siguientes penas:

|  |
| --- |
| Pena de prisión de 9,6 a 36 meses[[11]](#footnote-11) |
| Pena de multa 5.2 a 9 salarios mínimos legales mensuales vigentes |
| Privación del derecho a conducir vehículos motorizados por el lapso de 16 hasta 54 meses. |

Al aplicar el sistema de cuartos, como quiera que en contra del Procesado no se le endilgaron circunstancias de mayor punibilidad, acorde con lo establecido en el inciso 2º del articulo 61 C.P. la Sala acudiría al primer cuarto de punibilidad, el que oscilaría entre:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENA DE PRISIÓN** | **PENA DE MULTA** | **PRIVACIÓN CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES** |
| DE 9,6 HASTA 16.2 MESES | DE 5.2 A 6.15 SMMLV | DE 16 A 25.5 MESES. |

Ahora bien, al individualizar las penas, acorde con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la Sala aplicara las penas mínimas, o sea: a) La de 9,6 meses de prisión, b) La de multa de 5,2 *s.m.l.m.* vigentes para el año 2.016, la que deberá ser cancelada dentro del término de los 10 días hábiles subsiguientes a la fecha de la ejecutoria del presente fallo de 2ª instancia, en el fondo de la cuenta especial, que según los términos del artículo 42 del C.P. — modificado por el artículo 6º de la Ley # 2.197 de 2.022 — debe de figurar a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, c) La de 16 meses de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas.

Por otra parte en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, acorde con lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P. se tiene que esa pena debe corresponder a un tiempo igual al de la pena de prisión sin exceder el tope de los veinte años, y como quiera que en el presente asunto la pena de prisión impuesta al Procesado DARM fue de 9,6 meses de prisión, ello nos quiere decir que la pena accesoria de marras deberá ser por ese mismo período.

Como quiera que el monto de la pena principal que le correspondería purgar al procesado DARM no excede de los 4 años de prisión, ello implicaría para que acorde con lo reglado en el 63 C.P. deba hacerse acreedor del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por un lapso de prueba de 2 años, de conformidad con lo reglado en el artículo 63 del C.P., para lo cual el procesado, dentro de los 5 días subsiguientes a la última notificación del presente proveído de 2ª instancia, deberá constituir una caución prendaria equivalente a un cuarto de *s.m.m.l.v.* del año en curso y la suscripción de un acta de compromiso en la que se comprometa a cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 65 C.P.

Finalmente, en lo que atañe con los eventuales recursos de los cuales sería susceptible esta sentencia de 2ª instancia, la Sala no puede desconocer que se está en presencia de la primera sentencia condenatoria, por lo que acorde con lo ordenado por la Corte Constitucional en las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, que regularon el principio de la doble conformidad, y de lo que en términos similares adujo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 23 de abril de 2.019. Rad. # 54.215, válidamente se puede concluir que la Defensa del procesado DARM podría interponer en contra del presente fallo el recurso de impugnación excepcional.

**- Apuntes de colofón:**

La Sala, de manera lamentable, considera que al momento de proferir el presente fallo de 2ª instancia se encuentra extinta la acción penal, por haber operado el fenómeno de la prescripción, relacionada con el delito por el cual se declaró el compromiso penal del procesado DARM, y en consecuencia deberá decretar la preclusión de la actuación procesal.

Para demostrar lo anterior, es menester tener en cuenta que el día 21 de septiembre de 2.021, la Fiscalía le corrió traslado del escrito de acusación al procesado, mediante el cual, le endilgó cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas, que le generaron a la víctima una incapacidad médico-legal definitiva de 150 días con secuelas de perturbación funcional de miembro inferior izquierdo de carácter permanente.

Lo anterior quiere decir que a partir de esa fecha — acorde con las reglas consagradas en el artículo 292 C.P.P. en consonancia con el artículo 83 C.P. — tuvo lugar el fenómeno de la interrupción del término de prescripción de la acción penal, y se dio inicio de un nuevo término de prescripción por un lapso igual al de la mitad de la pena máxima de los delitos imputados, el cual *«comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.»[[12]](#footnote-12).*

De lo antes expuesto se desprende que el plazo que el Estado detentaba para ejercer su potestad punitiva fenecía el 21 de septiembre de 2.024, plazo este que se encuentra vencido a la fecha en la cual se profiere este fallo de 2ª instancia.

Como consecuencia de lo anterior, es claro que se está en presencia de una de las hipótesis de improseguibilidad del ejercicio de la acción penal, acorde con la causal del # 1º del artículo 332 C.P.P. y por ende al estar extinta la acción penal por haber operado la prescripción, se precluirá la actuación procesal que se surtió en contra del procesado DARM por incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas.

Finalmente, se considera que en el presente asunto no es necesario que se lleve a cabo la correspondiente audiencia de lectura de decisión, dado que ese acto procesal de notificación a las partes del contenido del fallo de 2ª instancia válidamente se puede suplir mediante la remisión — vía correo electrónico — con destino a las partes y demás intervinientes, por parte de la Secretaría, de copias integrales del contenido la presente providencia de 2ª instancia, tal y cual como lo regula el artículo 8º de la ley # 2.213 de 2.022 que avalan ese tipo de notificaciones, lo que además de no contrariar las disposiciones que en materia de notificaciones regula el C.P.P.

Aunado a lo anterior, como quiera que el presente se tramitó bajo el procedimiento especial abreviado, habrá de tenerse en cuenta lo descrito en los artículos 22 y 23 de la Ley 1826 de 2.017, y en ese sentido se tiene que para este tipo de procesos se permite la notificación de las sentencias fuera de estrados, por lo cual, así se dispondrá.

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala de decisión Penal # 4 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia proferida en las calendas del 21 de marzo de 2.023 por parte del Juzgado 2º Penal Municipal con funciones mixtas de Dosquebradas, mediante la que se absolvió al procesado DARM de los cargos relacionados con incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas, para en su lugar **DECLARAR** su responsabilidad criminal por incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas.

**SEGUNDO:** En consecuencia, de lo anterior se **CONDENARÁ** al procesado DARM a: I. Purgar una pena de 9,6 meses de prisión; II. El pago de una multa equivalente a 5,2 *s.m.l.m.v.* vigentes para el año 2.016, la que deberá ser cancelada dentro del término de los 10 días hábiles subsiguientes a la fecha de la ejecutoria del presente fallo de 2ª instancia, en el fondo de la cuenta especial, que según los términos del artículo 42 del C.P. — modificado por el artículo 6º de la Ley # 2.197 de 2.022 — debe de figurar a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, III. La privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas por un periodo de 16 meses.

**TERCERO: CONDENAR** al procesado DARM a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 12 meses.

**CUARTO:** Concederle al procesado DARM el disfrute del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por un periodo de prueba de 02 años, para lo cual el procesado, dentro de los 5 días subsiguientes a la última notificación del presente proveído de 2ª instancia, deberá constituir una caución prendaria equivalente un cuarto del *s.m.m.l.v.* del año en curso y la suscripción de un acta de compromiso en la que se comprometa a cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 65 C.P.

**QUINTO: PRECLUIR**, por estar extinta la acción penal como consecuencia de haber operado el fenómeno de la prescripción, la actuación procesal que se surtió en contra del procesado DARM por incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas.

**SEXTO: ORDENAR** que por Secretaría se proceda a notificar a las partes y demás intervinientes del contenido de esta providencia mediante la remisión de copias de la misma vía correo electrónico, tal y cual como lo regula el artículo 8º de la ley # 2.213 de 2.022 que avala ese tipo de notificaciones, lo que relevaría, por innecesaria, llevar a cabo la correspondiente audiencia de lectura del presente fallo de 2ª instancia.

**SEXTO: DECLARAR** que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia — en el evento que el procesado decida renunciar a la prescripción, procede el recurso de impugnación excepcional. Mientras que en lo que tiene que ver con la decisión de precluir la actuación procesal, solo procede el recurso de reposición. Dichos recursos deberán ser interpuestos y sustentados dentro de las oportunidades de ley.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:**

**MANUEL YARZAGARAY BANDERA**

**Magistrado**

**CON FIRMA ELECTRÓNICA**

**JAIRO MAURICIO CARVAJAL BELTRÁN**

**Magistrado**

**CON FIRMA ELECTRÓNICA**

**-Con salvamento parcial de voto-**

**CARLOS ALBERTO PAZ ZUÑIGA**

**Magistrado**

**CON FIRMA ELECTRÓNICA**

1. Se resalta que en el fallo de primera instancia se plasmó erróneamente como fecha de emisión del mismo, el 21 de marzo de 2.022, sin embargo, de acuerdo a la fecha en que se emitió el sentido del fallo y la firma electrónica generada por el Juez de instancia, se constata que la fecha corresponde al 21 de marzo de 2.023. [↑](#footnote-ref-1)
2. LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA, en “Comentarios a los Códigos de Penal y de Procedimiento Penal, pagina # 94, Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.002 [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 29 de julio de 2020. SP2811-2020. Rad. # 52.396 [↑](#footnote-ref-3)
4. LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Introducción a la imputación objetiva, pagina # 105 [↑](#footnote-ref-4)
5. LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Obra citada página # 141 [↑](#footnote-ref-5)
6. LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Obra citada página # 140. [↑](#footnote-ref-6)
7. Acorde con la doctrina, los elementos que integran la imputación objetiva son los siguientes: Relación de causalidad en los delitos comisivos; creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y relación de riesgos [↑](#footnote-ref-7)
8. LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA, en “Comentarios a los Códigos de Penal y de Procedimiento Penal, pagina # 94, 1ª Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.002. [↑](#footnote-ref-8)
9. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 06 de octubre de 2.021. SP4531-2021. Rad. # 58165. (Negrillas fuera del texto original). [↑](#footnote-ref-9)
10. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal: Providencia del 25 de septiembre de 2.024. AP5542-2024. Rad. # 58772. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tomando la pena del artículo 114 inciso 2 C.P., de conformidad con lo establecido en el artículo 117 ibidem. [↑](#footnote-ref-11)
12. Inciso 2º del artículo 292 del C.P.P. [↑](#footnote-ref-12)